

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR
	Cuenta N° 420
	TARIFA REDUCIDA Concesión N° 3146

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

29ª REUNION — 17ª SESION ORDINARIA (Continuación) —
28 DE SEPTIEMBRE DE 1988

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO J. PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
CORCHUELO BLASCO, Hebe
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GIL, Francisco
GROSSO, Edgardo Roger M.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JUÁREZ, Carlos Arturo
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.

RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SALIM, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
TENEV, Carlos
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.

AUSENTES, EN COMISION:

AMOEDO, Julio A.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
MENEM, Eduardo
ROMERO, Juan C.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

AUSENTES, CON AVISO:

MOLINA, Pedro E.
OTERO, Edison
SAADI, Ramón Eduardo
SAPAG, Elías
VIDAL, Manuel D.

sido a la Sociedad de Cirugía de San Juan (S.-106-281/88). Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 3268.)

51. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se expresa la solidaridad de este Senado con la Conferencia Episcopal Paraguaya ante los actos de hostigamiento y persecución del gobierno contra el clero (S.-106-466/88). Se rechaza. (Pág. 3269.)
52. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Trilla por el que se solicita la habilitación de carriles exclusivos en avenidas para el uso del transporte público de pasajeros (S.-106-399/88). Se aprueba. (Pág. 3271.)
53. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (P.E.-105-39/87). Se aprueba. (Pág. 3271.)
54. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Convención sobre la Ley Aplicable a Contratos de Intermediarios y a la Representación, adoptada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (P.E.-105-49/87). Se aprueba. (Pág. 3278.)
55. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Enmienda al Convenio Internacional de Líneas de Carga, 1966, y su Anexo (P.E.-105-41/87). Se aprueba. (Pág. 3282.)
56. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio con Nueva Zelanda para los servicios aéreos y su plan de rutas (P.E.-105-71/87). Se aprueba. (Pág. 3283.)
57. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueban las Enmiendas de 1981 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (P.E.-105-24/87). Se aprueba. (Página 3288.)
58. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal con el Reino de España P.E.-105-56/87). Se aprueba. (Pág. 3290.)
59. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y pro-

yecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (P.E.-105-150/88). Se aprueba. (Pág. 3300.)

60. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo con la República Popular China para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear (S.-105-164/88). Se aprueba. (Página 3305.)
 61. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Lafferrière por el que se expresa honda preocupación ante el conflicto armado suscitado entre Honduras y Nicaragua, y se solicita la intervención del Grupo de Apoyo a Contadora para una solución pacífica (S.-105-570/88). Se aprueba. (Pág. 3308.)
- Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se expresa la solidaridad con el pueblo armenio ante el deseo de reunificación de sus connacionales de la región de Nagorny Karabaj, incorporada a la URSS (S.-105-629/88). Se rechaza. (Página 3309.)
63. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo entre la República Argentina y la República Italiana sobre Tratamiento y Estadía de Trabajadores. (P.E.-106-4/88). Se aprueba. (Pág. 3311.)
 64. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Convención de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y la República Italiana (P.E.-106-5/88). Se aprueba. (Pág. 3314.)
 65. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Cooperación celebrado entre la República Argentina y la República Italiana para la Previsión, Prevención y Asistencia Mutua en caso de Calamidades (P.E.-106-6/88). Se aprueba. (Pág. 3316.)

66. Moción del señor senador Berhongaray para que el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicita apoyar en la Organización de las Naciones Unidas el tratamiento del reclamo por la libre determinación e independencia de Puerto Rico vuelva a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Se aprueba. (Pág. 3321.)

58

TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL CON ESPAÑA

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal con el Reino de España.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee*)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha vuelto a considerar el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 1988.

Adolfo Cass. — Julio A. Amoedo. — Luis A. León. — Hipólito Solari Yrigoyen. — Fernando de la Rúa.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébase el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, cuyo texto original, que consta de cuarenta y cuatro (44) artículos, en fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dante Caputo. — Antonio A. Tróccoli. — Julio R. Rajneri.

TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO DE ESPAÑA

La República Argentina y el Reino de España,

Conscientes de los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones y deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación en todas las áreas de interés común y entre ellas las de cooperación judicial.

Han resuelto concluir un Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal en los siguientes términos:

TÍTULO I

Extradición

Artículo 1º

Las Partes contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguiere por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad que consista en privación de libertad.

Artículo 2º

1. — Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año.

2. — Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir no sea inferior a seis meses.

3. — Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos los requisitos de los párrafos 1 y 2, la Parte requerida podrá conceder también la extradición por estos últimos.

Artículo 3º

También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Parte.

Artículo 4º

1. — En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de cambio la extradición se concederá, con arreglo a las disposiciones de este Tratado, si los hechos reúnen los requisitos del artículo 2º.

2. — La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación en estas materias que la legislación de la Parte requirente.

Artículo 5º

1. — No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará por sí como un delito de carácter político.

A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

- a) El atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia.
- b) Los actos de terrorismo;
- c) Los crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de la humanidad.

2. — Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la

solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, o bien que la situación de aquélla puede ser agravada por esos motivos.

Artículo 6º

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

Artículo 7º

1. — Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiera sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquélla.

2. — Si la Parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitud.

Artículo 8º

Nada de lo dispuesto en el presente Tratado podrá ser interpretado como limitación del asilo, cuando éste proceda. En consecuencia, la Parte requerida también podrá rehusar la concesión de la extradición de un asilado de acuerdo a su propia ley.

En caso de no accederse a la extradición, por este motivo, será de aplicación lo previsto en el párrafo 2 del artículo anterior.

Artículo 9º

No se concederá la extradición:

- a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte requirente ésta no tuviere competencia para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición;
- b) Cuando la persona reclamada hubiera sido condenada o debiera ser juzgada por un tribunal de excepción o *ad hoc* en la Parte requirente;
- c) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición;
- d) Cuando la persona reclamada hubiese sido juzgada en la Parte requerida por el hecho que motivó la solicitud de extradición.

Artículo 10

No se concederá la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan al reclamado a tratos inhumanos o degradantes.

Sin embargo, la extradición puede ser concedida, si la Parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad o de que no será sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 11

La extradición podrá ser denegada:

- a) Cuando fueren competentes los Tribunales de la Parte requerida, conforme a su propia ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a la extradición si la Parte requerida hubiese decidido o decidiese no iniciar proceso o poner fin al que se estuviese tramitando;
- b) Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio de la Parte requirente y la ley de la Parte requerida no autorizare la persecución de un delito de la misma especie cometido fuera de su territorio;
- c) Cuando la persona reclamada fuere menor de dieciocho años en el momento de presentarse la solicitud de extradición, tuviere arraigo en la Parte requerida y ésta considerare que la extradición puede perjudicar su inserción social, sin perjuicio de que se adopten las medidas más apropiadas que prevea la Ley de la Parte requerida.

Artículo 12

1. Si el reclamado hubiese sido condenado en rebelión, no se concederá la extradición si la Parte requirente no da seguridades de que será oído en defensa y podrá utilizar los recursos legales pertinentes.

2. Concedida la extradición, la Parte requirente podrá ejecutar la sentencia si el condenado consintiere expresamente.

Artículo 13

1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la Parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 15.

La autorización podrá concederse aún cuando no se cumplieren con las condiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2º.

2. No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada diere su expreso consentimiento o, habiendo tenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en él más de treinta días o regresare a él después de abandonarlo.

Artículo 14

Cuando la calificación del hecho imputado se modifique durante el procedimiento, la persona entregada

no será perseguida o sentenciada sino en la medida en que los elementos constitutivos de delito que correspondan a la nueva calificación hubieran permitido la extradición.

Artículo 15

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

2. A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

- a) Copia o transcripción de la sentencia condenatoria, o del auto de procesamiento, prisión o resolución análoga según la legislación de la Parte requirente, con relación sumaria de los hechos, lugar y fecha en que ocurrieron y, en caso de sentencia condenatoria, certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, indicándose el tiempo que faltare por cumplir;
- b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y huellas dactilares;
- c) Copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también los referentes a la prescripción de la acción y de la pena o medida de seguridad;
- d) Las seguridades sobre la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere el artículo 10, cuando fuere necesario.

Artículo 16

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará lo más pronto posible a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieran observado dentro del plazo que fije la Parte requerida.

2. Si por circunstancias especiales la Parte requirente no pudiere cumplir dentro de ese plazo, podrá solicitar a la Parte requerida que éste sea prorrogado.

Artículo 17

La Parte requerida podrá conceder la extradición sin cumplir con las formalidades que establece este Tratado, si la persona reclamada, con asistencia letrada, prestare su expresa conformidad después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento de extradición y de la protección que éste le brinda.

Artículo 18

1. La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, por la vía del artículo 15, su decisión respecto de la extradición.

2. Toda negativa, total o parcial, será motivada.

3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán

de acuerdo para llevar a efecto la entrega del reclamado, que deberá producirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

4. Si la persona reclamada no fuere recibida dentro de dicho plazo, será puesta en libertad y la Parte requirente no podrá reproducir la solicitud por el mismo hecho.

5. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser puestos igualmente a su disposición.

Artículo 19

1. — Si la persona reclamada se encontrare sometida a procedimiento o condena penales en la Parte requerida, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas esas responsabilidades en dicha Parte, o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con la Parte requirente.

2. — Cuando el traslado pusiere seriamente en peligro la vida o la salud de la persona reclamada, la entrega podrá ser postergada hasta que desaparezca tal circunstancia.

3. — También se podrá aplazar la entrega del reclamado cuando circunstancias excepcionales de carácter personal y suficientemente serias la hicieren incompatible con razones humanitarias.

Artículo 20

Negada la extradición por razones que no sean meros defectos formales, la Parte requirente no podrá efectuar a la Parte requerida una nueva solicitud de extradición por el mismo hecho.

Artículo 21

1. — La extradición en tránsito por el territorio de una de las Partes se otorgará previa presentación por la vía del artículo 15 de una solicitud, acompañada de una copia de la comunicación mediante la cual se informa de la concesión de la extradición, juntamente con una copia de la solicitud original de extradición, siempre que no se opongan motivos de orden público. Las Partes podrán rehusar el tránsito de sus nacionales.

Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del reclamado.

La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos que éste realice con tal motivo.

2. — No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto algún aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito.

Artículo 22

La reextradición a un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido la extradición, salvo en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 13.

A tal efecto deberá efectuarse una nueva solicitud de extradición con todos los requisitos establecidos en este Tratado.

Artículo 23

1. — Si la extradición de una misma persona hubiera sido solicitada por varios Estados, la Parte requerida determinará a cuál de esos Estados entregará el reclamado y notificará su decisión a la Parte requirente.

2. — Cuando las solicitudes se refieran al mismo delito la Parte requerida deber dar preferencia a la solicitud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito, salvo que existan circunstancias particulares que recomienden otra cosa.

Las circunstancias particulares que podrán tenerse en cuenta incluyen la nacionalidad y el domicilio habitual de la persona reclamada y las fechas de las respectivas solicitudes.

3. — Cuando las solicitudes se efectúen por distintos delitos, la Parte requerida dará preferencia a la que se refiera al delito considerado más grave conforme a sus leyes, salvo que las circunstancias particulares del caso recomienden otra cosa.

Artículo 24

1. — En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.

2. — La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de alguna de las resoluciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15 y hará constar la intención de cursar seguidamente una solicitud de extradición. Mencionará, asimismo, el delito por el cual se solicitará, el tiempo y lugar de la comisión de aquél y en la medida de lo posible la filiación de la persona reclamada.

3. — La solicitud de detención preventiva se remitirá en forma postal, telegráfica o cualquier otra que deje constancia escrita, por la vía del artículo 15 o por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal.

4. — La Parte requerida informará a la Parte requirente de las resoluciones adoptadas y especialmente y con carácter urgente, de la detención y del plazo dentro del cual deberá presentarse la solicitud de extradición.

5. — La autoridad competente de la Parte requerida podrá acordar la libertad del detenido adoptando las medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo caso se decretará la libertad, si en el plazo de cuarenta días desde la detención, no se hubiese recibido la solicitud de extradición.

6. — Si la persona reclamada fuera puesta en libertad por cumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, la Parte requirente no podrá solicitar nuevamente la detención de la persona reclamada sin presentar la solicitud formal de extradición.

7. — Cuando el procedimiento de extradición se iniciase mediante la solicitud prevista en el artículo 15, sin previa petición urgente de detención, ésta se llevará a efecto, así como su modificación, de conformidad con la ley de la Parte requerida.

Artículo 25

1. — A petición de la Parte requirente, la Parte requerida asegurará y entregará, en la medida en que lo per-

mitiese su legislación, los documentos, bienes y otros objetos:

- a) Que pudiesen servir de piezas de convicción, o
- b) Que, procediendo del delito, hubiesen sido encontrados en el momento de la detención en poder de la persona reclamada o fueren descubiertos con posterioridad.

2. — La entrega de esos documentos, dinero u objetos se efectuará incluso en el caso de que la extradición ya concedida no pudiese tener lugar a consecuencia de la muerte o evasión de la persona reclamada.

3. — La Parte requerida podrá conservarlos temporalmente o entregarlos bajo condición de su restitución, si ellos fueren necesarios para la sustanciación de un proceso penal en trámite.

4. — En todo caso quedarán a salvo los derechos que la Parte requerida o terceros hubieran adquirido sobre los citados objetos. Si existieren tales derechos, los objetos serán restituidos lo antes posible y sin gastos a la Parte requerida.

Artículo 26

Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán a cargo de ésta, salvo los gastos de transporte internacional de la persona reclamada, que serán a cargo de la Parte requirente.

Artículo 27

La Parte requirente podrá designar un representante oficial con legitimación para intervenir ante la autoridad judicial en el procedimiento de extradición. Dicho representante será citado en forma, para ser oído antes de la resolución judicial sobre la extradición.

TÍTULO II

Asistencia judicial en materia penal

Artículo 28

1. — Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, según las disposiciones de este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a la Parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

2. — La asistencia podrá prestarse en interés de la justicia, aunque el hecho no sea punible según las leyes de la Parte requerida. No obstante, para la ejecución de medidas de aseguramiento de objetos o registros domiciliarios, será necesario que el hecho por el que se solicita la asistencia sea también considerado como delito por la legislación de la Parte requerida.

Artículo 29

La asistencia judicial podrá ser rehusada:

- a) Si la solicitud se refiere a delitos políticos o conexos con delitos de este tipo, a juicio de la Parte requerida. A estos efectos será de aplicación lo prescripto en el párrafo 1 del artículo 5º;
- b) Si la solicitud se refiere a delitos estrictamente militares.

Artículo 30

1. — La solicitud de asistencia revestirá la forma de carta o comisión rogatoria.

2. — El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo conforme a la legislación de la Parte requerida y se limitará a las diligencias expresamente solicitadas.

3. — Cuando una solicitud de asistencia no pudiese ser cumplida, la Parte requerida la devolverá con explicación de la causa.

Artículo 31

Si la Parte requirente lo solicita expresamente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la comisión rogatoria.

Artículo 32

La Parte requerida cumplimentará las comisiones rogatorias relativas a un procedimiento penal emanadas de las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de instrucción o actos de comunicación.

Artículo 33

1. — Si la Comisión rogatoria tiene por objeto la transmisión de expedientes, elementos de prueba y, en general, cualquier clase de documento, la Parte requerida podrá entregar solamente copias o fotocopias autenticadas, salvo si la Parte requirente pide expresamente los originales.

2. — La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, expedientes o documentos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permitiera o si le son necesarios en un procedimiento penal en curso.

3. — Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una comisión rogatoria serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie a ello.

Artículo 34

1. — Si la solicitud tuviere por finalidad la entrega de objetos o documentos, la Parte requerida procederá a la entrega de los objetos o documentos que le sean enviados a dicho fin por la Parte requirente.

2. — La entrega será realizada en alguna de las formas previstas por la legislación de la Parte requerida, y se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario o mediante certificación de la autoridad competente que acredite la diligencia. Uno u otro de estos documentos serán enviados a la Parte requirente y, si la entrega no ha podido realizarse se harán constar las causas.

3. — Si la solicitud tuviere por objeto la notificación de una decisión judicial, la notificación se efectuará en la forma que prevea la legislación procesal de la Parte requerida.

Artículo 35

1. — Cuando las autoridades judiciales o del Ministerio Público de una de las Partes estimaren especialmente necesaria la comparecencia personal en su territorio de un inculcado, testigo o perito, lo harán constar expresamente en la resolución que disponga la citación.

2. — La solicitud que tenga por objeto la citación de un inculcado, testigo o perito, ante las autoridades de la Parte requirente, podrá no ser diligenciada si es recibida dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha señalada para la comparecencia. La Parte requirente deberá tener en cuenta este plazo al formular la solicitud.

3. — La Parte requerida procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso de incomparecencia.

4. — La solicitud deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado.

Artículo 36

1. — El testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación comparezca ante las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido o sometido a cualquier otra restricción de su libertad personal en esta Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida. Tampoco lo podrá ser el inculcado salvo por los hechos que constasen en la citación.

2. — La inmunidad prevista en el precedente párrafo cesará cuando el inculcado, testigo o perito permaneciere voluntariamente más de treinta días en el territorio de la Parte requirente, después del momento en que su presencia ya que no fuere exigida por las autoridades judiciales o del Ministerio Público de dicha Parte.

Artículo 37

Si la solicitud tuviere por objeto la declaración en la Parte requerida de un inculcado, testigo o perito, ésta procederá a su citación bajo las sanciones conminatorias que disponga su propia legislación.

Artículo 38

1. — Si la citación para declarar ante las autoridades de la Parte requirente se refiriera a una persona detenida o presa en el territorio de la Parte requerida, ésta sólo accederá a ella si el detenido prestare su consentimiento y siempre que la Parte requerida estime que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.

2. — La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.

3. — Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta de la Parte requirente.

Artículo 39

1. — Cuando una de las Partes solicite de la otra los antecedentes penales de una persona, hará constar el motivo de la petición. Dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

2. — Sin perjuicio de ello, las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra, con periodicidad anual.

Artículo 40

1. — Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

- a) Autoridad de la que emana la petición y naturaleza de su resolución;
- b) Delito a que se refiere el procedimiento;
- c) En la medida de lo posible, identidad y nacionalidad de la persona encausada o condenada;
- d) Descripción precisa de la asistencia que se solicite y toda la información que se estime útil para facilitar el efectivo cumplimiento de la solicitud.

2. — Las solicitudes de asistencia que tengan por objeto cualquier diligencia distinta de la simple entrega de objetos o documentos, contendrán también una sumaria exposición de los hechos y la acusación formulada si la hubiere.

3. — Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte requerida, ésta la devolverá con explicación de la causa.

Artículo 41

1. — La solicitud de asistencia será transmitida por la vía diplomática. No obstante ello, las Partes podrán designar otras autoridades habilitadas para enviar o recibir tales solicitudes.

2. — Las Partes podrán encomendar a sus Cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación del Estado receptor.

Artículo 42

1. — Toda denuncia cursada por una Parte contratante cuyo objeto sea incoar un proceso ante los Tribunales de la otra Parte, se transmitirá por las vías previstas en el artículo anterior.

2. — La Parte requerida notificará a la Parte requiriente el curso dado a la denuncia y remitirá en su momento una copia de la decisión dictada.

TITULO III

Disposiciones finales

Artículo 43

1. — No se requerirá legalización de las firmas de las autoridades y funcionarios de las Partes contratantes que obren en los documentos emitidos en aplicación de este Tratado.

2. — Cuando se acompañaren copias de documentos deberán presentarse certificadas por autoridad competente.

Artículo 44

1. — El presente Tratado está sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

2. — El Tratado entrará en vigor treinta días después de la fecha del canje de los instrumentos de ratificación y seguirá en vigor mientras no sea denunciado por una

de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después de la fecha de recepción de la denuncia.

3. — Al entrar en vigor este Tratado, terminará el Tratado del 7 de mayo de 1881, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 de este artículo.

4. — Las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor de este Tratado se regirán por sus cláusulas, cualquiera que sea la fecha de comisión del delito.

5. — Las extradiciones solicitadas antes de la entrada en vigor de este Tratado continuarán tramitándose conforme a las disposiciones del Tratado del 7 de mayo de 1881.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires a los tres días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República
Argentina

Julio Raúl Rajneri.
Ministro de Educación
y Justicia.

Por el Reino
de España

Fernando Ledesma Bartet.
Ministro de Justicia.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 30 de junio de 1987.

Al Honorable Congreso de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 3 de marzo de 1987.

Por el presente convenio ambas Partes se comprometen a entregarse recíprocamente, y conforme las reglas establecidas en el mismo, a las personas a quienes las autoridades judiciales de la otra Parte persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad que consista en la privación de la libertad. Asimismo se dispone que también darán lugar a la extradición los delitos incluidos en las convenciones multilaterales en las que ambos países sean parte y se excluye del ámbito de aplicación del Tratado a los delitos militares.

Por otra parte se establecen los supuestos en que la extradición no será concedida, tales como el caso de los delitos considerados como políticos o conexos con éstos, o cuando existan motivos fundados para suponer que la solicitud de extradición está encaminada a perseguir o castigar a la persona reclamada por cuestiones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o cuando se la castigue con la pena de muerte, privación de libertad o cadena perpetua, o la pena conlleve la aplicación de medidas que atenten contra la integridad corporal del reclamado o impliquen el sometimiento del mismo a tratos inhumanos o degradantes. También podrá denegarse la extradición del asilado.

Asimismo se determina que para que el entregado pueda ser juzgado, condenado o sometido a cualquier restricción por hechos anteriores y distintos del que

motivó el pedido de extradición, la parte requirente deberá solicitar autorización de la parte requerida. En caso de que el reclamado sea de la nacionalidad de la parte requerida, ésta podrá oponerse a conceder la extradición, debiendo someterlo en ese caso a sus autoridades competentes.

Finalmente se establece el procedimiento a seguir, y se regulan los supuestos de reextradición y solicitud de extradición por varios Estados.

En lo que se refiere a la asistencia judicial en materia penal, las partes se obligan a colaborar mutuamente en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

La colaboración podrá ser rehusada si se refiere a delitos políticos, conexos con éstos o estrictamente militares.

Por último se determina el régimen a aplicar según se trate de transmisión de expedientes o antecedentes, entrega de objetos, comparecencia del inculcado, testigo o perito.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

RAÚL R. ALFONÍN.

*Dante Caputo. — Antonio A. Tróccoli. —
Julio R. Rajneri.*

Sr. Presidente. — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez. — Señor presidente: lamento introducir un germen de discrepancia en la consideración de algunos de los aspectos de este tratado, pero hace a mi deber de hombre de leyes y de parlamentario contribuir a pulir en algo la mala fórmula técnica que se ha elegido para algunos de los artículos, a los que voy a hacer referencia.

En primer lugar, quiero esclarecer la facultad que tiene el Parlamento para modificar los tratados que suscriba el Poder Ejecutivo. Esta facultad parlamentaria ha sido algo cuestionada en algunos casos, sobre todo, en los referidos a tratados bilaterales. Pero una generosa corriente doctrinaria, fluida, consistente, múltiple, reconoce al Parlamento la mencionada facultad de enmienda de los tratados.

En el orden doctrinario, solamente voy a citar la opinión del distinguido constitucionalista Joaquín V. González expresada en su Tratado y que reiteró en ocasión de discutirse en este Senado el Tratado de Arbitraje General y Obligatorio con Italia. Refirma el doctor Joaquín V. González la facultad parlamentaria de introducir modificaciones en los tratados sobre la base de que no son simples actos diplomáticos ni soluciones ocasionales sino leyes permanentes que integran el orden jurídico de la Nación y se aplican, por ende, por los jueces, como leyes supremas del país.

También Carlos Sánchez Viamonte se inclina por extender al Congreso esta facultad de alterar el texto de los tratados sometidos a su consideración e Isidoro Ruiz Moreno —el conspicuo tratadista de derecho internacional— coincide también en esta opinión, al manifestar en sus *Lecciones de Derecho Internacional Público* que "...el tratado debe ser ratificado sin enmiendas, en principio; pero nada obsta a que el Congreso lo apruebe con determinadas modificaciones, en ciertos casos...". De la misma opinión es Helio J. Zarini, según consta en su *Análisis de la Constitución Nacional*.

Además de estas expresiones doctrinarias, la República ha dado reiteradas pruebas desde el inicio de su marcha en el orden constitucional acerca del ejercicio de esta facultad del Parlamento para modificar los tratados suscritos por el Poder Ejecutivo. Dentro de la copiosa jurisprudencia existente, citaré solamente los antecedentes referidos a este tópico de la extradición; que son los tratados de extradición celebrados con las siguientes repúblicas: Oriental del Uruguay, ley 150; Bolivia, ley 159; Italia, ley 344; Brasil, ley 458; Chile, ley 3.106; Portugal, ley 3.950; nuevamente, Brasil, leyes 4.027 y 519 —esta última, más antigua—.

Vale decir que la República Argentina ha ejercido este derecho de modificar los tratados a través de su Parlamento. Y si el Congreso puede modificarlos, con mayor autoridad está facultado para efectuar reservas a esos tratados.

A este respecto quiero expresar que el derecho a estas reservas en los tratados internacionales esta reconocido por la Convención de Viena de 1969, ratificada por nuestro país. Precisamente, se establece allí el derecho de formulación de reservas del Estado en el momento de firmarse el tratado.

Por su parte, el embajador Delpoch, en su obra *El Derecho de los Tratados y la Convención de Viena*, también ratifica esta facultad parlamentaria de introducir modificaciones en aquellos, cuando sean considerados en el seno del Parlamento argentino.

También quiero traer a colación el juicio de la Corte Internacional de Justicia que reconoce, aun en los tratados multilaterales, la validez de las reservas sin necesidad del consentimiento unánime de todos los Estados contratantes.

Por otra parte, esta facultad ha sido ejercida por el país también en el Tratado de Comercio y Navegación con Brasil, con una reserva expresa, y en la ley 15.869 —por la que la Argentina adhirió a la Convención de Ginebra sobre refugiados de 1951— donde también se reconoce dicha facultad.

Demostrada, pues, con estos breves antecedentes doctrinario-jurisprudenciales la facultad del Parlamento, entro entonces a manifestar mis discrepancias con algunos artículos de este Tratado.

En primer lugar, en el artículo 2º se establece que "darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año".

Quizá esté un poco obsesionado con este tema de las extradiciones, porque padecí durante varios años, junto a muchos exiliados argentinos, su sombra que pendía sobre la intranquilidad de nuestras vidas como tales.

Pues bien, este proyecto de ley permite la extradición cuando se trata de delitos cuya pena no sea inferior a un año. Entonces, lo que queda sin esclarecer es qué pasa cuando un delito tiene una pena exactamente de un año, porque el tratado dice cuando las penas no sean inferiores a un año.

Hay delitos en el Código Penal, como el de lesiones, que precisamente tienen como sanción máxima un año. Yo me pregunto si este delito por lesiones leves entra en los casos de extradición o no.

Como esta cuestión no está clara y es irracional que se pueda extraditar a alguien por una lesión leve, yo solicito la reserva con respecto a este artículo para insertar una frase por la cual se establezca que solamente se extraditan los delitos cuya pena máxima sea superior a un año, con lo cual queda perfectamente esclarecido el concepto de esta penalidad a la que hace referencia nuestro Código respecto a las lesiones leves.

Por otra parte, en el artículo 5º se estipula que no se concede la extradición por delitos políticos o conexos, lo cual me parece realmente excelente, pero se exceptúa por no considerarse delito político al atentado contra la vida de un jefe de Estado o un miembro de su familia. Aquí se cae en otro error técnico en esta disposición del tratado porque se dice que se considera la extradición cuando se atente contra la vida de un miembro de la familia del jefe de Estado, sin especificar el grado de parentesco, de suerte tal que por aplicación de este tratado podrían entonces ser penados con la extradición aun los que atenten contra un primo político o un primo segundo de un jefe de Estado. Esta prohibición debe regir solamente cuando se trata de hijos, cónyuge o padres del jefe de Estado.

Esta es la opinión que yo deslizo a través de esta reserva.

Lo mismo ocurre cuando se hace referencia a actos de terrorismo sin especificar en qué consisten tales actos, pues por esa vía pueden facilitarse excesiva e incondicionalmente las extradiciones. Tiene que especificarse qué actos de terrorismo son los que comprometen la libertad, la vida o la seguridad de las personas.

Finalmente, se establece en el artículo 24 que en caso de urgencia las autoridades competentes de la parte requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada. Se dice "En caso de urgencia...", pero nada se establece en cuanto a qué debe considerarse como tal. De esta manera el país que solicita una extradición puede arbitraria o discrecionalmente invocar el caso de urgencia para pedir la detención del residente en el extranjero y esto me parece a mí que linda con los marcos de la arbitrariedad.

Yo considero que debe contemplarse el caso de urgencia, pero debidamente acreditado y probado por el país requerido. Esta es la forma, entonces, mediante la cual se pueden garantizar con seriedad estas situaciones que merecen el máximo respeto.

Estas tres breves modificaciones o discrepancias me inducen a solicitar que este tratado pueda ser aprobado, pero con esas reservas.

He presentado una iniciativa que se encuentra en un orden del día, del que no se ha dado lectura, por la que presentaba un proyecto de modificación a este tratado. Pero en consideración al respeto que me merece la autoridad que lo ha suscrito y a la entidad misma del acto internacional, quiero cambiar este proyecto de modificación del tratado por una mera expresión de reserva de estos artículos para que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en el momento de firmarlo, se haga reserva expresa de la inteligencia y la comprensión de estas disposiciones.

Sr. Presidente. — Tien la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — En cuanto a si en un tratado bilateral pueden hacerse reservas o no, lo hemos considerado en este recinto muchísimas veces.

Podría dar nuevamente las argumentaciones que esgrimi repetidas ocasiones ante lúcidas e inteligentes intervenciones del desaparecido señor senador Martiarena quien permanentemente, cada vez que considerábamos un tratado bilateral, quería hacer la reserva pertinente en algunos aspectos.

Ante esas continuas manifestaciones y preocupaciones del señor senador Martiarena, nosotros hicimos consultas en la asesoría legal de la Cancillería, y es evidente —por eso no volveré a re-

petir lo expresado hace seis o siete meses a raíz de una intervención importante del senador Martiarena— que no se puede modificar un tratado bilateral a pesar de todos los antecedentes que tan bien ha citado el señor senador por la provincia de Santiago del Estero.

Es como decimos, o como a veces sostienen los abogados: hay dos bibliotecas, una que dice que sí se puede y otra que dice que no.

Nuestra asesoría legal...

Sr. Juárez. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Gass. — Sí, señor senador.

Sr. Juárez. — Gracias, señor senador.

Estó está claro. Yo comprendo —y lo he deslizado— que existen discrepancias en el orden doctrinario. Lo he manifestado anteriormente. Pero también he citado ocho o diez tratados, precisamente de extradición, que han sido objeto de reservas.

Es como pasa con el paisano. Se le dice: "Mire, que no puede", y él contesta: "Entonces, ¿cómo estoy pudiendo?" (*Risas.*)

Y el país está pudiendo, sí, se puede. Y hay antecedentes, no sólo de reservas sino de modificaciones. Hay más de veintisiete antecedentes firmados por el país. Sí, se puede.

De todos modos, senador Gass, yo me hago cargo de su duda y de su intranquilidad. Pero le pido que me conteste lo siguiente. Si en el artículo 2º de este proyecto de ley se dice "cuya duración máxima no sea inferior a un año", ¿qué ocurre con aquellos que tienen una pena de un año, que no es "inferior"?

Esto está mal redactado. Advierto que el propósito que guió la estructura de este dispositivo es evitar la extradición para los delitos leves, entre ellos quizá el de lesiones, y entre éstas, los que tienen penas de hasta un año. Pero esto no está dicho aquí. El día de mañana puede ser objeto de discrepancias y diferendos, que no hay que dejar al azar. Esta es la oportunidad de efectuar la reserva para que haga referencia a los que están penados con más de un año. Ese es el mismo espíritu que guió esta disposición.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Gass. — Señor presidente: puedo estar de acuerdo con las modificaciones que sensatamente...

Sr. Juárez. — No son modificaciones sino pedidos de reserva.

Sr. Gass. — Por eso; voy a proponer otra cosa.

He consultado este tema y lo hemos estudiado en la comisión. El señor senador Juárez no vino a la reunión pero envió a su asesor, un importante hombre de derecho...

Sr. Juárez. — Quiero aclarar que no estaba en la Capital.

Sr. Gass. — No estoy haciéndole un cargo, sino todo lo contrario. Estoy hablando de su preocupación porque al no poder concurrir envió a su asesor.

Hemos conversado nuevamente este tema con la asesoría letrada de la Cancillería. Insisten en que no aceptemos reservas. Si en todo caso un señor senador quiere hacer alguna modificación, que presente un proyecto en tal sentido y será considerado en la asesoría letrada de nuestra Cancillería. Según ellos, si nosotros hacemos alguna reserva, automáticamente no habrá tratado porque antes no lo conversamos con el país con el que se firmó.

Yo insisto, señor senador, en que no podemos hacer una reserva. No lo hemos hecho nunca en los cinco años que llevamos aquí. Nunca se aceptó una reserva. Y esto no es una cuestión personal. Usted sabe que no abordaría estos problemas tan difíciles...

Sr. Juárez. — ¿Me permite una brevísima interrupción?

Sr. Gass. — Sí, señor senador; con mucho gusto.

Sr. Juárez. — Yo comprendo; sé que este Senado no ha aceptado este tipo de reservas. Repito que lo sé y lo comprendo. Pero no nos aferramos empecinada y contumazmente a esta clase de antecedentes cuando estamos frente a una realidad que no podemos superar con el tratado.

Le pregunto, senador Gass, si una pena de un año es "inferior a un año". Y si no es así, este tratado está mal. ¿Por qué vamos entonces a dejarlo así?

Sr. Gass. — Puedo estar absolutamente de acuerdo, pero en el momento en que hacemos una reserva —y usted me pasa esta mitad de la biblioteca—, este Tratado con el otro país no existe más. Entonces, no se aprueba el Tratado de extradición con el Reino de España.

La otra posibilidad que le doy...

Sr. Juárez. — Se aprueba con reservas...

Sr. Gass. — Nuestra Cancillería no aprueba tratados bilaterales con reservas.

Sr. Juárez. — Los antecedentes...

Sr. Gass. — Los antecedentes están en contra de su posición. Porque inclusive, a pesar de las múltiples intervenciones del señor senador Martiarena —y de las consultas con Cancillería— en aquel entonces, hacía su exposición y manifestaba que sabía que no iba a ser aceptada. Además él, íntimamente, aceptaba que era así,

a pesar de toda la bibliografía que nos proporcionaba y de los autores que usted tan bien ha mencionado.

Sr. Juárez. — Más que hacer referencia a autores he mencionado toda la jurisprudencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay más de treinta tratados no con reservas, sino modificados. Existe una facultad parlamentaria...

Sr. Cass. — Pero yo quiero, señor senador...

Sr. Juárez. — ...que quizás no se la quiere asumir, sí. Pero ¿cómo va a quedar esa cláusula?

Sr. Cass. — Haga un proyecto de modificación de los artículos tales y tales y, así, se contará con un arma, con un elemento para discutir sobre el tema y modificar este Tratado o hacer uno nuevo.

Si hoy rechazamos este proyecto y hacemos la reserva, no existe el Tratado con el Reino de España.

Le ruego al señor senador que adoptemos...

Sr. Juárez. — ¿Usted y su bancada me van a acompañar con el voto, si yo presento el proyecto de modificación?

Sr. Cass. — Por supuesto que sí. No me comprometo por la bancada porque hay muchos abogados, pero yo sí me comprometo.

Sr. Juárez. — No podemos quedar en la impresión...

Sr. Cass. — Solicito que, si hay quórum suficiente, pasemos a votar el orden del día.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: usted es abogado. Y en anterior oportunidad en que habló el compañero de bancada, senador Britos, más de una vez dijo "yo no soy abogado", y lo viene repitiendo en varias sesiones. Incluso, el señor senador Nápoli mencionó que es médico y no abogado. En tres oportunidades, el señor senador Cass dijo que Vélez Sarsfield tenía divididas sus opiniones en las dos mitades de su biblioteca. Y justamente se trata del autor del Código Civil, con sus 4.051 artículos. Eso usted lo sabe, señor presidente, porque es abogado.

Pero parecería que los señores médicos de la bancada oficialista y el señor senador Britos dicen "yo no soy abogado", como si serlo fuera mala palabra. (*Risas.*)

Entonces, yo le diría a usted, señor presidente, que observe que si los señores senadores, doctores Cass y Nápoli y el señor senador Britos, sin ser abogados, son los que son y se manejan como se manejan, ¿cómo sería si fueran abogados? ¡Dios me libre! Eso es lo que están insinuando en el mensaje que subyace en sus palabras.

Sr. Rodríguez Saá. — ¡Que ocurriría si nosotros, los abogados, fuéramos médicos!

Sr. Corchuelo Blasco. — Los abogados, señor presidente, nunca tenemos pleitos propios; siempre estamos en pleitos de los que no son abogados.

Sr. Cass. — A veces, de abogados.

Sr. Corchuelo Blasco. — Sería oportuno que cuando se habla del ilustre autor de nuestro Código Civil, pieza que —los abogados lo sabemos mejor— orientó el derecho privado de todos los países de América latina, no se refieran a él como que tenía la mitad de la opinión en una parte de la biblioteca y la otra mitad en la otra parte. Quizás esta reflexión apunta a todas las voces que hacen referencia a nuestra profesión y se constituye en defensa de la ciencia jurídica, que es tan vieja como el mundo mismo.

Sr. Juárez. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Corchuelo Blasco. — Sí, señor senador.

Sr. Juárez. — El señor senador Corchuelo Blasco dice que se hizo alusión al título de abogado con algo de mengua para la profesión.

Para poner una nota de humor, quiero decir lo siguiente: ¿qué sería de nosotros, los abogados, si no existiesen los médicos y, sobre todo, los obstetras? (*Risas.*)

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: tengo un gran respeto por la Justicia, así como también por los abogados. Si me acusan de algo, no puedo presentarme solo ante la Justicia sino que necesito un letrado. En ese caso tendré que buscar alguno bueno.

Sr. Juárez. — Téngame presente, señor senador. (*Risas.*)

Sr. Cass. — Con mucho gusto, señor senador.

Vuelvo a decir que si en la semana se presenta un proyecto de comunicación por el que se solicite la modificación propuesta por el señor senador Juárez me comprometo a que la mayoría de la comisión —no sé si todo el bloque— lo apoyará para que de ahí en más la Cancillería vuelva a estudiar todos los antecedentes y definiendo internacionalmente que los tratados bilaterales pueden tener reservas.

Solicito al señor senador por la provincia de Santiago del Estero que votemos este tratado tal cual está redactado.

Sr. Rubeo. — Que se vote.

Sr. Presidente. — Se va a llamar para votar.

—Así se hace.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de comisión tal como figura en el orden del día.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

59

ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — *(Lee)*

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha vuelto a considerar el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 102 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 1988.

Adolfo Gass. — Julio A. Amoedo. — Luis A. León. — Hipólito Solari Yrigoyen. — Fernando de la Rúa. — Orlinda del Valle Rivas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébase el Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, suscrito en París el 18 de junio de 1971 y modificado en Quito el 30 de abril de 1975, y en San José de Costa Rica el 8 de junio de 1979, cuyo texto, que consta de quince (15) artículos en fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

RAÚL R. ALONSO.

Dante Caputo. — Juan V. Sourrouille. — Jorge F. Sábato.

ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)

PREÁMBULO

Las Altas Partes Contratantes,

1. Recordando la creación en 1957 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de Chile, en aplicación de las recomendaciones de la Primera Conferencia Regional sobre la Enseñanza Universitaria de las Ciencias Sociales de América del Sur, que se reunió en marzo de 1956, en Río de Janeiro, y al apartado d) de la Resolución 3.42, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su novena reunión celebrada en Nueva Delhi, en noviembre de 1956;

2. Subrayando la importancia de la contribución de este organismo a través de sus Sedes Académicas, Programas y Proyectos al desarrollo en toda América latina de la enseñanza y de la investigación en Ciencias Sociales, desde su creación hasta la fecha;

3. Considerando que el desarrollo y la integración latinoamericana requieren aumentar la colaboración de estos países en el campo de las Ciencias Sociales a través de instituciones regionales de alto nivel, que cooperen con los gobiernos y con las universidades e institutos nacionales, preparando personal técnico y prestando asistencia técnica y asesoría cuando ello sea necesario; y,

4. Decididas a proporcionar a este organismo su completo apoyo moral, intelectual y financiero, según las modalidades que se definen a continuación, han convenido fortalecer institucionalmente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mediante la aprobación del siguiente Acuerdo

Artículo I

Naturaleza y fines

1. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, denominada en adelante FLACSO, es un organismo internacional de carácter regional y autónomo, constituido por los países latinoamericanos y del Caribe, para promover la enseñanza e investigación en el campo de las Ciencias Sociales.

2. Siempre que en este Acuerdo se empleen los términos "América latina", "Latinoamérica" y "latinoamericano", se entenderá que comprenden a los países de la región y del Caribe.

3. El carácter efectivamente regional y autónomo de la FLACSO está asegurado por el reclutamiento de un cuerpo docente y administrativo internacional integrado por especialistas latinoamericanos, en lo posible en base a una adecuada representación geográfica regional; por su programa de enseñanza e investigación que tendrá en cuenta las necesidades científico-sociales de la zona; por la selección de sus alumnos regulares que principalmente serán egresados latinoamericanos de universidades de estos países; por las becas de estudios que se otorgarán, en medida de lo posible, de acuerdo a una ade-